El señor Presidente

cambio de gobierno en Guatemala

Por Esteban Smolarz

Guatemala es un país en el que los acontecimientos políticos proveen más que sólo inspiración para novelas de dictadores cómo aquella que nos obsequió la pluma de Miguel Ángel Asturias. La nación más poblada de América Central es el paradigma inmejorable de la evolución institucional por la que ha transitado toda América Latina, con las personalidades y los hechos características de cada período. Desde el mandato eterno de Manuel Estrada Cabrera hasta el retorno de la democracia formal en los 80', pasando por el derrocamiento de Jacobo Arbenz y los 150.000 indígenas pobres asesinados en la "guerra civil", su historia es una secuencia insistente de inestabilidad y violencia. Este rasgo no se explica únicamente por la injerencia de multinacionales bananeras o la amenaza siempre presente de los marines, y la reciente renuncia de Otto Pérez Molina no es una excepción.

"Acorralado por el conjunto de los aparatos del Estado, carente de toda legitimidad popular y desprovisto de todo apoyo político, el 2 de septiembre Pérez Molina renunció a la presidencia"

La caída de un gobierno en 100 días

Es un lugar común sostener que crear una comisión es la mejor manera de lograr que algo no funcione. Sin embargo, Guatemala parece constituir una excepción, gracias a la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala). Creada en 2006 luego de un acuerdo ente el gobierno y la ONU, la CICIG fue concebida como un órgano independiente abocado a rastrear y desbaratar redes criminales organizadas. En abril de este año, con la colaboración de miembros de la justicia, consiguió sacar a la luz un aparato ilegal de recolección de dádivas conocido como "La Línea", que basaba su funcionamiento en el control de las aduanas, en las cuales los importadores obtenían rebajas en los impuestos a cambio del pago de sobornos.

La notoriedad que alcanzó el caso se nutrió de la complicidad de altos directivos en la red ilegal, lo que provocó la renuncia de importantes funcionarios, entre ellos los responsables de los organizamos recaudadores, Omar Franco y Carlos Muñoz. La oposición presionó para implicar también a la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien el 9 de mayo cesó en el ejercicio de sus funciones tras presentar su renuncia, una vez que la Corte Suprema de Justicia habilitase iniciar un proceso de investigación en torno a su complicidad en el asunto. En el lapso de una semana, el presidente Otto Pérez Molina anunció la dimisión de prácticamente todo su gabinete, acelerando la pérdida de capital político y

EL FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO HIZO EFECTIVAS MÁS DE 40 ÓRDENES DE CAPTURA CONTRA UNA BANDA QUE SE DEDICABA A LA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA Y CONTRABANDO. ENTRE LOS CAPTURADOS SE ENCUENTRA EL EX SUPERINTENDENTE DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), CARLOS MUÑOZ Y DE DE OMAR FRANCO, ACTUAL SUPERINTENDENTE DE LA SAT.

ROXANA BALDETTI DEJÓ SU CARGO TRAS FUERTES DENUNCIAS VINCULADAS A SU ACTUAR EN EL ÁMBITO DE LA ADUANA E IMPUESTOS. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PROCESADA.

SE HACEN SENTIR. LAS PROTESTAS Y MANIFESTACIONES POR EL PEDIDO DE RENUNCIA Y JUICIO POLÍTICO AL PRESIDENTE Y SUS FUNCIONARIOS FUERON NUMEROSOS EN TODO EL PAÍS.

"La idea de que el pueblo es depositario de toda soberanía, la cual ejerce a través del voto, no debe confundirse con que son los ciudadanos de a pie quienes ejercen total control sobre los mecanismos de poder, y que por lo tanto no existirían grupos por fuera del mismo con intereses divergentes. Tal noción se ha probado falsa, y los cambios frecuentes de gobierno, como el que aún transcurre en Guatemala, no son sino síntomas de un fenómeno relevante pero comúnmente poco atendido."

de legitimidad que sufría su gobierno, la cual se vio agravada por una nueva denuncia de corrupción a fines de mayo, esta vez vinculada con un supuesto fraude en perjuicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Paralelamente, la tensión social se incrementaba con la convocatoria cada vez mayor que alcanzaban las manifestaciones condenando el accionar gubernamental.

La permanencia de Pérez Molina en el cargo presidencial se dilató hasta que a principios de julio la Corte de Constitucionalidad le revocó el amparo provisional previamente concedido que le confería inmunidad ante el inminente pedido de juzgamiento. El 21 de agosto, la CICIG y el Ministerio Público giraron una orden de captura contra la ex presidenta Roxana Baldetti y presentaron una solicitud de antejuicio contra el presidente. Acorralado por el conjunto de los aparatos del Estado, carente de toda legitimidad popular y desprovisto de todo apoyo político, el 2 de septiembre Pérez Molina renunció a la presidencia, para ser reemplazado por el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre, quien asumió tal función tras la salida de Baldetti. El 6 de septiembre se celebraron elecciones en todo el país, aunque aún resta una segunda vuelta para definir al sucesor de Maldonado Aguirre.

De los golpes contra la democracia a la democracia golpista

En los 80' una oleada democrática revivió los sistemas representativos en toda la región. Esta situación auguraba un futuro en donde la inestabilidad política, expresada a través de golpes de Estado recurrentes o crónicas guerras civiles, cedería el lugar a esquemas de competencia electoral y de mayor representatividad. Tres decenios más tarde, tal pronóstico se antoja exagerado. La democracia formal no consiguió promover por sí sola el desarrollo económico, mientras que los niveles de bienestar social no se elevaron hasta que en ciertos países, y no justamente los centroamericanos, los

MILES DE GUATEMALTECOS SE CONGREGARON EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CAPITAL DEL PAÍS CENTROAMERICANO PARA MANIFESTARSE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN ATRIBUIDOS AL GOBIERNO DEL PRESIDENTE OTTO PÉREZ MOLINA.

gobiernos del "giro a la izquierda" asumieron el poder.

Por fuera de las expectativas incumplidas, es interesante abordar los supuestos que acompañaron un entusiasmo que se ha desvanecido. La idea de que el pueblo es depositario de toda soberanía, la cual ejerce a través del voto, no debe confundirse con que son los ciudadanos de a pie quienes ejercen total control sobre los mecanismos de poder, y que por lo tanto no existirían grupos por fuera del mismo con intereses divergentes. Tal noción se ha probado falsa, y los cambios frecuentes de gobierno, como el que aún transcurre en Guatemala, no son sino síntomas de un fenómeno relevante pero comúnmente poco atendido.

Separando las consideraciones éticas, de lo que se trata es de enfocarse en las luchas por ocupar espacios de poder y acceder a puestos de decisión. Si en el pasado los desembarcos de marines, las operaciones de la CIA y los golpes de Estado eran las herramientas que cual espada de Damocles condicionaban con su eventual uso el ejercicio de un gobierno, hoy los medios de comunicación, las camarillas judiciales y las presiones del mercado asumen el rol de imponer límites a las decisiones de los mandatarios electos, y no exactamente por convicción moral. El proceso actualmente en curso en Guatemala no necesita analogías demasiado lejanas: Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay y, como anhelan los cabilderos mediáticos y corporativos, Rousseff en Brasil, completarían una lista en la que la corrupción o el supuesto desvío de los mandatos de la ley ameritan la deposición inmediata e inapelable de los máximos responsables políticos.

Redefiniendo lazos de legitimidad

La tarea consiste entonces en advertir esta relación de fuerzas, y cuáles son los intereses en pugna. Pareciera que la democracia latinoamericana, como cualquier sistema político, o se halla a merced de intereses particulares influyentes y por lo tanto no posee la legitimidad pretendida, o consiste sólo en otra forma de reproducción de dirigencias que vacían y desvirtúan los fundamentos del Estado. Los nuevos métodos corporativos de condicionamiento y posterior remoción de gobernantes aprovechando su falta de integridad deben ser una invitación a la formación de líderes políticos que basen su fortaleza en no facilitar motivos para deslegitimarse, y que por tanto consigan el apoyo necesario para encarar los cambios aún pendientes en la región.